

CONSENSO AUTONÓMICO PARA LA COMPETITIVIDAD

Enric Tintoré

Los presidentes de las comunidades autónomas españolas coinciden en destacar el clima de baja actividad que se vive en sus territorios y en señalar al desempleo como el primer problema que deben afrontar como gobernantes. Existe también un consenso generalizado en torno a que la solución para crear empleo es la mejora de la competitividad, que, a su vez, exigiría un mayor aumento de la inversión en infraestructuras y la puesta en marcha de planes industriales regionales.

Prácticamente ninguno de los gobernantes autonómicos ha planteado, paradójicamente, la necesidad de limitar el gasto público de su comunidad autónoma con objeto de contribuir al saneamiento global de las administraciones públicas y, por tanto, facilitar el control de la inflación, que es la base de la competitividad que tanto les preocupa. La única excepción a la regla ha sido la de **José Bono Martínez**, Presidente de Castilla-La Mancha.

Este podría ser, a grandes rasgos, el resumen analítico de las entrevistas que se publican a continuación, en donde los presidentes autonómicos han tenido la amabilidad de responder abiertamente a las preguntas realizadas por PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA.

En todos los rincones de España, como reflejan las estadísticas y los indicadores, se vive un ambiente económico de crisis y de pesimismo. En su respuesta a la primera pregunta, ningún presidente autonómico ha podido sustraerse al impacto que se deriva de la desaceleración de la actividad productiva y de la caída de la inversión.

Ante las crecientes dificultades que genera la situación económica, la actitud generalizada de los entrevistados es la de afrontar la actual crisis como una oportunidad para mejorar, antes que como un obstáculo irresoluble. En este sentido, en el transcurso del último año, parece haberse tomado clara y definitiva conciencia de que la internacionalización de la economía obliga imperiosamente a que la competitividad sea el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo regional; una competitividad que afecta tanto a la defensa de las empresas arraigadas ya en el territorio como a la mejora del entorno y de los incentivos para la atracción de nuevas localizaciones industriales.

En consecuencia, la mejora de las infraestructuras y de la competitividad industrial son, según la mayoría de los presidentes, los principales retos que tienen las comunidades autónomas. Las soluciones propuestas pasan, en primer lugar, por reclamar a la Administración central la realización de mayores infraestructuras, fundamentalmente

en carreteras y ferrocarriles, con objeto de resolver los todavía elevados déficit que existen en el ámbito de las comunicaciones.

Las comunidades menos desarrolladas de España tienen además la esperanza de beneficiarse directamente de las nuevas ayudas establecidas en el Fondo de Cohesión Europeo. Así, Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura son, por ejemplo, cuatro comunidades que aspiran a defender su *status* de «región objetivo número 1».

PLANES DE APOYO A LA INDUSTRIA

La necesidad de aumentar la competitividad de las empresas, así como de incrementar la dimensión de éstas y su proyección internacional constituye el segundo bloque de preocupación y de acción de gobierno de los presidentes autonómicos. En este sentido, son numerosas las comunidades que han puesto en marcha planes concretos de apoyo a la industria. Algunas comunidades han ido más lejos y han logrado involucrar al conjunto de fuerzas políticas y/o a los agentes económicos y sociales en la firma de pactos para la reactivación, la creación de empleo y la modernización económica y social.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha en este sentido han sido la Mesa Industrial con empresarios y sindicatos que ha constituido el Gobierno de Aragón; el Plan Marco de Actuación Industrial, con 33 medidas de choque, del País Vasco; el Pacto Industrial firmado en Castilla-La Mancha; el Pacto por la Industria y el Empleo de Madrid; el Plan de Reindustrialización de Asturias; el Plan de Reactivación Económica de Murcia y el Pacto Social de Andalucía, que contempla un decidido compromiso de empresarios y sindicatos en política de rentas. Así, mientras la patronal andaluza recomienda a sus afiliados la reinversión constante de sus beneficios, los sindicatos aconsejarán la moderación salarial, en línea con el frustrado pacto por la competitividad propuesto en 1991 por el gobierno central a los agentes económicos y sociales.

El conjunto de planes industriales puestos en marcha este año coincide, en líneas generales, con muchas de las actuaciones desarrolladas en años anteriores por la Generalidad de Cataluña, que se basan en la creación de infraestructuras industriales, comerciales y de formación en apoyo de la empresa. Así, las líneas fundamentales de la política industrial diseñada por las comunidades autónomas, al margen de la ayuda a las empresas en crisis, se basan en la creación de zonas de desarrollo, el impulso a nuevos proyectos, la formación profesional, la innovación tecnológica, el fomento de la investigación y las actuaciones de promoción para incrementar el comercio exterior.

Las comunidades autónomas del artículo 143, como lamenta el Presidente de Aragón, **Emilio Eiroa**, sufren, sin embargo, limitaciones muy importantes para poder generar políticas de desarrollo, de competitividad y, en consecuencia, también de convergencia con Europa.

El País Vasco, debido a su especial concierto económico con la Administración central, es la única comunidad autó-

noma que puede orientar su política industrial hacia la creación de un contexto competitivo global para sus empresas, en la medida en que puede reforzar en este sentido las actuaciones del gobierno de Madrid. Así, el País Vasco es la única comunidad que ha podido incrementar sensiblemente los incentivos fiscales para la creación o instalación de nuevas empresas. Y también es la única comunidad que puede bonificar directamente los créditos destinados al sector industrial y abaratar, por tanto, los costes financieros. Estos son dos hechos diferenciales importantes.

CRITICAS A LA POLITICA MACROECONOMICA

Los presidentes de la Generalidad de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, en su calidad de representantes de dos comunidades en donde la presencia de empresas industriales es muy grande, coinciden en criticar la política macroeconómica del gobierno, que ha provocado tipos de interés muy altos, una cotización de la peseta muy elevada y, por tanto, una enorme pérdida de competitividad durante varios años, que, finalmente, se ha corregido con la devaluación de la peseta.

Otro presidente autonómico que ha criticado duramente la política excesivamente monetarista del gobierno del PSOE en los últimos años es el de Baleares. Así, **Gabriel Cañellas** considera que la elevada cotización de la peseta ha perjudicado mucho a su comunidad en la medida en que ha penalizado al turismo extranjero, que es la espina dorsal de la actividad de las Islas Baleares.

La reforma de la política agraria común, que tiene una especial incidencia en las producciones continentales —como los cereales, la producción láctea o la remolacha— preocupa también especialmente en un gran número de comunidades autónomas, que temen que los problemas puedan verse agravados como resultado de la negociación de la Ronda Uruguay en el seno del GATT.

CONFIANZA ANTE EL FUTURO

Existe, pese a todo, una coincidencia general entre los presidentes autonómicos en que las dificultades económicas no deben hacernos perder de vista lo más importante, que es la necesidad de mejorar el aparato productivo, aumentar el empleo y facilitar el acceso a un mejor nivel de vida de todos los ciudadanos.

Estamos —como afirma **Joan Lerma**, Presidente de la Generalidad Valenciana— mejor preparados que en anteriores ocasiones para poder superar la actual crisis. Esta afirmación la revalida **Jordi Pujol**, Presidente de la Generalidad de Cataluña, cuando afirma que las empresas resisten bien, aunque pone el dedo en la llaga al destacar que la clave de esa capacidad de resistencia radica en que han podido traspasar el peso del ajuste a la reducción de las plantillas. «Y eso —afirma— puede ser bueno en la medida en que evita el cierre de las empresas, pero no deja de ser preocupante».

Ante la difícil situación económica internacional, que coincide en 1993 con la total y absoluta apertura del mercado español a la competencia internacional, no hay soluciones mágicas ni recetas milagrosas. De eso también son conscientes todos los presidentes autonómicos. En palabras del Presidente vasco, **José Antonio Ardanza**, «sólo existe un camino para avanzar: trabajar unidos, pero, además, hay que hacerlo más y mejor que los demás».